El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de la respectiva Sala.

***ORALIDAD***

**Providencia**: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de octubre de 2017

**Radicación No**:66001-31-05-002-2013-00126-01

**Proceso**: Ordinario Laboral

**Demandante**: Blanca Mary Varón Loaiza

**Demandado:** Colpensiones

**Juzgado de origen**: Segundo Laboral del Circuito de Pereira.

**Magistrado Ponente:** Francisco Javier Tamayo Tabares

**Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes. Carga probatoria.** La labor que debe desplegar quien alegue tener la vocación a la pensión por sobrevivencia, no es otra que la de demostrar de manera clara que convivió, en los términos antes anotados, con el afiliado o pensionado, de manera ininterrumpida, por el lapso mínimo de cinco años anteriores al deceso. Y como la norma exige convivencia, no importa si se dio en el marco de una relación matrimonial o una relación de hecho, pues ambas tienen igual tratamiento por la ley, pudiendo incluso darse la convivencia una parte, en el marco de una unión de hecho y otra por vínculos jurídicos o viceversa.

**LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MEDIANTE SENTENCIA SL4409-2020, RADICACIÓN Nº 80307, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB DE DICHA CORPORACIÓN, CASÓ EL PRESENTE FALLO Y “EN SEDE DE INSTANCIA” REVOCÓ LA SENTENCIA PROFERIDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE LA CIUDAD Y, EN SU LUGAR, ABSOLVIÓ A COLPENSIONES DE TODAS LAS PRETENSIONES.**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Magistrado Ponente: **FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES**

En Pereira, hoy diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve y cuarenta y cinco de la mañana (09:45 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia las magistradas y el suscrito magistrado de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2016 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso Ordinario Laboral que promueve ***Blanca Mary Varón Loaiza*** contra la ***Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones***, y ***Jhoan Sebastián Ortiz Varón***, en calidad de interviniente ad-excludendum.

1. ***ANTECEDENTES***

Persigue la demandante que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se declare: (i) que el señor Homero Ortiz Rodríguez dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y (ii) que ella es beneficiaria de dicha prestación pensional, y en consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la misma, desde el 7 de agosto de 2003 con el correspondiente retroactivo pensional, incluyendo las mesadas adicionales, y las costas del proceso.

Para así pedir, relata que el señor Homero Ortiz Rodríguez falleció el 7 de agosto de 2003, calenda para la cual no estaba afiliado al ISS ni estaba cotizando al sistema pensional, sin embargo, tenía un total de 741 semanas de aportes durante toda su vida laboral, de las cuales más 300 habían sido consolidadas ates del 1º de abril de 1994. Indica que ella y el señor Ortiz Rodríguez contrajeron matrimonio el 3 de diciembre de 1983, convivieron en forma continua e ininterrumpida hasta la fecha del deceso de aquel y procrearon dos hijos; que mediante memorial presentado el 11 de julio de 2012 agotó la vía gubernativa, sin embargo, el ISS no dio respuesta.

Admitida la demanda, la entidad demandada, a través de apoderado judicial allegó respuesta oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por considerar que el asegurado no dejó acreditados los requisitos exigidos para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues no reunió 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de su deceso, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. En su defensa, formuló las excepciones de “Inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes” y “Prescripción”.

Por su parte, los hijos del afiliado fallecido Carlos Andrés Ortiz Barón y Jhoan Sebastián Ortiz Barón comparecieron al proceso por virtud de lo dispuesto por esta Colegiatura mediante proveído del 21 de enero de 2016, que dispuso integrar en debida forma el contradictorio. El primero, no presentó pretensión alguna a su favor, por cuanto a la fecha del deceso de su padre tenía más de 18 años de edad y no estaba estudiando, por ende, se allanó a la totalidad de los hechos y pretensiones de la demanda principal.

El segundo, se allanó igualmente a la demanda principal, empero, de manera parcial, pues considera que le asiste el derecho a compartir con la demandante la pensión de sobrevivientes que reclama, puesto que al momento del deceso de su padre contaba con 11 años de edad. Aunado a ello, indica que arribó a los 18 años de edad el día 30 de mayo de 2010, y que con posterioridad a esa calenda no ha realizado estudios y se ha dedicado a trabajar. Por lo anterior, solicita que se declare que en calidad de hijo menor de edad a la muerte del causante Ortiz Rodríguez, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada; en consecuencia, pide se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la prestación desde el 7 de agosto de 2003 y el 30 de mayo de 2010, así como al pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100/93.

Colpensiones guardó silencio en el término otorgado para descorrer el traslado.

1. ***SENTENCIA DEL JUZGADO***

El Juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 14 de octubre de 2016, en la que declaró que el afiliado fallecido Homero Ortiz Rodríguez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de sus causahabientes, al paso que declaró como beneficiarios de la prestación, a la señora Blanca Mary Varón Loaiza y al joven Jhoan Sebastián Ortiz Varón, en calidad de cónyuge supérstite e hijo menor del causante, desde el 7 de agosto de 2003, declarando respecto de la primera, la prosperidad de la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con antelación al 11 de julio de 2009.

En consecuencia, condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor del tercero interviniente y de la demandante, en un 50 % para cada uno, hasta el 30 de mayo de 2010, acrecentada para la demandante en un 100% a partir del 1º de junio de 2010. Condenó a título de retroactivo a favor de Jhoan Sebastián la suma de $23`401.015 y de $ 60.050.487 a favor de Blanca Mery Varón Loaiza. Condenó en costas procesales a la parte vencida en juicio en un 80 %.

En la motiva, luego de apoyarse en pronunciamientos de la Corte Constitucional, estimó que el afiliado fallecido dejó causado el derecho a la pensión, por haber colmado la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. De otra parte, de las pruebas testimoniales recibidas en la actuación, dio por acreditada la calidad de beneficiaria a la pensión de sobrevivientes de la actora, por haber demostrado convivencia con el fallecido por un lapso superior a 5 años antes de su deceso. De otra parte, encontró que el hijo menor del causante ostentaba la calidad de beneficiario de la prestación, en los términos señalados por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

1. ***CONSULTA***

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatarlo.

1. ***ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA***:

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir lo de su competencia, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante (art. 66 A CPLSS.). Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir lo que corresponda, previas las siguientes:

***CONSIDERACIONES***

***Del problema jurídico.***

En orden a resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala deberá abordar el siguiente problema jurídico:

*¿El afiliado fallecido Homero Ortiz Rodríguez dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa? En caso positivo,*

*¿Acreditaron Blanca Mary Varón Loaiza y el tercero interviniente Jhoan Sebastián Ortiz Varón, las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes reclamada?*

***Desenvolvimiento de la problemática planteada***

Son supuestos fácticos no controvertidos: (i) que el señor Homero Ortiz Rodríguez fue declarado fallecido el 7 de agosto de 2003, a través de la sentencia dictada por el Juzgado 1º de Familia de Cartago el 31 de enero de 2012, tal como se colige del registro civil de defunción visible a fl.17; (ii) que aquel había sufragado un total de 847 semanas al ISS entre el 6 de mayo de 1980 y el 31 de agosto de 1998, de las cuales más de 300 lo fueron antes del 1º de abril de 1994, según la historia laboral que obra a fl.76, (iii) que la actora y el causante contrajeron matrimonio católico el 3 de diciembre de 1983, y que el vínculo permaneció vigente hasta la muerte del afiliado, sin que hubiera existido disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y (iv) que la pareja procreó dos hijos, Carlos Andrés y Jhoan Sebastián, siendo éste último menor de edad a la fecha del deceso del afiliado, pues según se colige del certificado de registro civil de nacimiento visible a folio 184, su natalicio ocurrió el 30 de mayo de 1992.

Partiendo de esas bases, se adentrará la Colegiatura a resolver el primero de los dilemas jurídicos planteados, consistente en determinar si el afiliado fallecido dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios.

Para ello, es menester precisar que la normatividad aplicable, por regla general, a la pensión de sobrevivientes, es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, que para este caso era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige una densidad mínima de 50 semanas dentro de los tres años anteriores al deceso del asegurado; condición ésta que no se satisfizo en el caso puntual, pues en este interregno no se efectuó ninguna cotización.

Bajo esas circunstancias, dado que el asegurado al 1º de abril de 1994, había aglutinado más de 300 semanas sufragadas al sistema pensional, las que en vigencia del acuerdo 049 de 1990, hubieran sido suficientes para que sus causahabientes alcanzaran el derecho a la pensión de sobrevivientes, es preciso el análisis en torno a si en favor de las pretensiones de la demandante y el interviniente ad-excludendum juega el principio de la condición más beneficiosa.

En ese orden, las altas Cortes han dimensionado la densidad de aportes exigidas en rigor de una norma anterior al del suceso de la muerte, en aras de atender el principio de la condición más beneficiosa, fundada justamente en la expectativa legítima que la situación le envuelve a su titular, en instantes en que en palabras del órgano de cierre de la especialidad laboral, sus sentencias: 22 de octubre de 2013, 8 de mayo y 25 de julio de 2012, radicaciones: 39229, 35319 y 38674, entre otras.

“*Bajo las anteriores perspectivas, el [principio de la condición más beneficiosa], tiene adoctrinado la Sala por línea general, entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificar el régimen pensional al cual estuvieran adscritos, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbi gratia, haber cumplido íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación de índole pensional. A ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la vigente para el momento en que reunieron la densidad exigida para obtener la prestación. En ese horizonte, ha enseñado esta corporación que, tratándose de derechos que no se consolidan por un solo acto sino que suponen una situación que se integra mediante hechos sucesivos, hay lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se cumpla la última condición, pero que sí implica una situación concreta protegida por la ley, tanto en lo atinente al acreedor como al deudor, por lo que supera la mera o simple expectativa. Estas son las llamadas por la doctrina constitucional “expectativas legítimas*” (sentencia de 25 de julio de 2012 atrás reseñada).

Tal manera de razonar, para justificar la condición más beneficiosa entre la ley 100 de 1993 y el acuerdo 049 de 1990, posee para la Corte Suprema de Justicia, otros ingredientes jurídicos, tomados tanto del derecho internacional como interno, al traer a cuento el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT, el Convenio 128 de la OIT, relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, que dispone:

“ART. 30.—La legislación nacional deberá, bajo condiciones prescritas, prever la conservación de los derechos en curso de adquisición respecto de las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivientes”.

Al efecto, la alta Corporación hace notar que “*este convenio confiere un valor relevante a la preservación de “los derechos en curso de adquisición”, destacando con ello la obligación estatal de respetar aquellos requisitos que ya han sido consolidados por una persona, con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición*” (ob. cit.).

Por otra parte, también a manera ilustrativa, cita el Convenio 157 de la OIT, sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social (1982), que versa sobre los llamados “derechos en curso de adquisición, en materia de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes”.

Así mismo, trae a cuento el artículo 2º de la declaración universal de los derechos humanos, y los convenios 100 y 101 sobre factores ilegítimos de discriminación, y remata con la legislación interna, artículo 13 superior, y 272 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al primero, predica:

“bajo la órbita del artículo 13 superior, imponer unas condiciones más exigentes a quien ha consolidado de hecho, bajo una determinada normativa, una “situación” de semanas cotizadas, que le confieren fundamento para reclamar ulteriormente una pensión de invalidez, o a sus sucesores una de sobrevivientes, constituye una forma de discriminación. Es decir, en este caso se está imponiendo un trato diferente, más gravoso, con un motivo no relevante, como lo es el hecho de que, no obstante su situación consolidada, deba acreditar adicionalmente mayores requisitos, en ausencia de los cuales no puede ser beneficiario de la respectiva pensión. Con otras apalabras, se estaría contraviniendo lo proclamado por el artículo 53 superior, que ordena reconocer “la situación más favorable…”.

Al paso que el artículo 272 de la Ley 100 de 1993, establece que “los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia”. Y con ello pregona el órgano de cierre de la especialidad laboral, “*la propia Carta Fundamental extiende a la seguridad social, sin ninguna duda, los principios que, en su origen, son propios del derecho laboral*”.

En lo que toca al principio de la sostenibilidad financiera del sistema de la seguridad social, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2005, señala la ameritada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:

“la aplicación jurisprudencial del principio de la condición más beneficiosa no atenta contra la regla de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, no solo porque esta regla obliga específicamente al legislativo a partir de la fecha señalada, sino, sobre todo, porque la aplicación del principio señalado opera sobre unas personas que han reunido las exigencias fácticas que, bajo una normativa determinada, aseguraban a ellas o a sus sucesores la obtención de un derecho. Y al reunir esas exigencias fácticas, traducidas en una determinada densidad de cotizaciones, esas personas han igualmente satisfecho las exigencias de tipo financiero demandadas por el sistema, según la normativa para ese momento. O sea, para el sistema vigente en ese momento, sus pensiones estaban financiadas al cumplir el tiempo exigido de cotización…el hecho de que una persona haya cumplido con los requerimientos de cotización impuestos bajo una determinada normativa, garantiza que la pensión para la cual ha cotizado está garantizada por el propio estado, con lo cual se cumple otro elemento normativo adicionado al artículo 48 de la Constitución por el Acto Legislativo 01 de 2005”.

En estos puntuales aspectos, es preciso indicar en respaldo de la tesis favorable a la condición más beneficiosa, en materia de pensión de sobrevivencia o invalidez, gracias al salto de las Leyes 797 u 860 de 2003 al Acuerdo 049 de 1990, que la misma se ve robustecida, primero, por cuanto si se sustentan en la expectativa legítima, ésta no admite límite en el tiempo, además, recientemente la Corte Constitucional (sentencia T SU-442) dijo:

“en virtud de la condición más beneficiosa, las expectativas legítimamente contraídas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 constituyen barreras, que limitan la competencia del legislador para agravar los requisitos ya cumplidos mediante reformas desprovistas de regímenes de transición. Este límite, de raigambre constitucional, es entonces oponible a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, en su versión original, e incluso por la Ley 860 de 2003”.

En segundo lugar, resulta significativo el planteamiento del alto Tribunal Constitucional, en orden a que no sea estrictamente necesaria, en ejercicio de la condición más beneficiosa, la aplicación de la norma sucesivamente anterior, sobre el fundamento de que este principio se basa en la certeza y no en la duda.

Así lo expuso en sentencia de Tutela SU-442 de 2016 (18 de agosto), tras exponer que como órgano de cierre en materia constitucional tiene competencia para unificar la interpretación correspondiente (CP. 241), prosigue que a diferencia de los principios de favorabilidad e indubio pro operario, “*la condición más beneficiosa se desarrolla sobre la base de la certeza, pues el operador jurídico sabe cuál es la norma vigente y cuál, por ende, debería aplicar. Lo que sucede es que, al comprobar que dicha actuación tendría unos efectos desproporcionadamente injustos en un caso particular, acude a una excepción resolviendo la situación con una norma derogada*”.

Finalmente remata, en torno a la carga argumentativa del juez, que el asunto:

“versa sobre un derecho fundamental, como es el relativo al derecho a la seguridad social. Existe en este aspecto una prohibición de regresividad que incrementa la carga de argumentación judicial para retroceder en el alcance de protección alcanzado…. Esta prohibición ata a todas las autoridades, incluidas las judiciales. Por lo que para apartarse de la jurisprudencia en sentido restrictivo es preciso demostrar que hay argumentos poderosos para no incurrir en la prohibición de regresividad en los derechos sociales. Pues bien, la Corte considera que no se han aportado razones de esa naturaleza para cambiar la jurisprudencia constitucional vigente sobre la materia, o para apartarse de ella”.

Con todo el material jurisprudencial citado de que se ha hecho mérito, es menester recordar que más allá de acudir al concepto que en sí mismo encierra el principio de la condición más beneficiosa, a propósito de los cambios legislativos entorno a las pensiones de invalidez y sobrevivencia, a lo que realmente se acude es al principio de favorabilidad, en los términos como lo entiende la Corte Constitucional, proporcionalidad, equidad, igualdad, buena fe y confianza legítima, por cuanto en una sana lógica, no tendría explicación que quien apenas haya efectuado aportes por 26 o 50 semanas, cual ocurre en el ámbito de aplicación de las leyes 100 y 797 o 860, respectivamente, se causaría el derecho a sus beneficiarios, en cambio, quienes por no haber colmado ese mínimo de cotizaciones, pero sí más de 150 o 300 con anterioridad a la Ley 100, quedarían por fuera de la protección legal.

Así las cosas y como en este caso el señor Homero Ortiz Rodríguez antes del 1º de abril de 1994 había cotizado un total de 625.14 semanas al sistema de pensiones, es evidente que en aplicación del aludido principio, debe entenderse que se dejó causado el derecho pensional, conforme a las pautas del Acuerdo 049 de 1990, que en su canon 6º, en concordancia con el 25, establece que deben ser 300 semanas en cualquier tiempo, densidad ampliamente superada.

Por último, ha de estimarse que en sentencia SL 2358 de 2017, el órgano de cierre de esta especialidad no le puso límite temporal a la pensión de sobrevivientes causada con 300 semanas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100/93, como sí lo hizo referente a la condición más beneficiosa, en la órbita de la Ley 797 de 2003.

Superado ese primer escollo, se adentrara la Sala en determinar si la demandante ostenta la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada, la cual está supeditada a que se evidencie que hubo convivencia con el afiliado o pensionado fallecido durante -mínimo- los cinco años que antecedieron su deceso.

Con tal propósito, la demandante citó a rendir declaración a los señores Oscar Fernando Rodríguez y Néstor Antonio Zapata Nieto. El primero, indicó conocer a la pareja Ortiz – Varón desde hace 25 años, por razones de vecindad en el Barrio San Nicolás; que la demandante y el causante eran casados, que procrearon dos hijos, Andrés Felipe y Sebastián, quienes se desempeñan como comerciante y guarda de seguridad, respectivamente; que la demandante era ama de casa y el causante manejaba taxi; que era él quien velaba por el sostenimiento del hogar, y que nunca tuvo noticia de separación o rompimiento de la pareja.

Por su parte, el señor Zapata Nieto relató también que por razones de vecindad conoció a la demandante, que estaba casada con el señor Homero Ortiz; que la pareja procreó dos hijos, ambos ya con hogar constituido; que la pareja vivía muy bien, que convivió durante más de 25 años y que nunca se llegó a separar. Indicó que el de cujus trabajó en papeles nacionales y que en el 2001 desapareció mientras manejaba taxi.

Dicha prueba testimonial permite dar por sentado que la demandante, en calidad de cónyuge supérstite, hizo vida marital con el causante por un lapso superior a cinco años anteriores a la fecha en que fue declarado su fallecimiento, por lo que se observa atino en la conclusión de la a-quo, en cuanto la tuvo como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

Respecto del tercero interviniente, Jhoan Sebastián Ortiz Varón, se tiene que los hijos del afiliado serán beneficiarios de la prestación hasta cuando cumplan 18 años de edad, o hasta los 25 años, cuando estuvieren incapacitados para laborar en razón de sus estudios. De modo que, en el caso de autos no milita duda respecto a que al joven Jhoan Sebastián, en principio, le asistía el derecho a percibir la gracia pensional solicitada desde el 3 de agosto de 2003, fecha del deceso del asegurado y, hasta el 30 de mayo de 2010, calenda en que cumplió 18 años de edad, sin que con posterioridad hubiere emprendido estudios para conservar su derecho a percibir la prestación hasta cumplir 25 años de edad, tal como lo aceptó en su escrito de intervención presentado el 5 de abril de 2016 –ver folio 177-.

No obstante lo anterior, esta Sala de Decisión se ha abstenido de hacer el reconocimiento de retroactivo pensional alguno antes de la ejecutoria de la sentencia, en la medida en que la prevalencia del derecho acá declarado, surge por una interpretación constitucional favorable.

Es ese el marco frente al cual el órgano de cierre de la especialidad laboral, en un caso análogo de interpretación constitucional favorable, indicó que se está en frente de un evento en que las actuaciones de las administradoras de pensiones, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, “*encuentran plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que le es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir*”. (Sent.02 de octubre de 2013. Rad. 44.454 Cas. Laboral).

En tal virtud, respecto a la cónyuge sólo procede el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales a partir de la ejecutoria de este proveído. En cuanto al menor éste no percibirá el retroactivo pensional, puesto que su disfrute correspondería a una época posterior al de su minoría de edad.

Por ende, se revocará parcialmente la sentencia de primer grado, en virtud del grado de consulta que opera en favor de la entidad demandada.

Respecto del valor de la mesada pensional para el año 2017, efectuados los cálculos respectivos, ésta asciende a la suma de $792.741, conforme al cuadro que se pone de presente a los asistentes y hará parte integrante del acta final que se suscriba con ocasión de esta diligencia. Se accederá a 13 mesadas pensionales anuales, debido a que la causación del derecho a la gracia pensional se fijó a partir de la ejecutoria de este proveído, al tenor de lo establecido en el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005.

En cuanto a las costas, se exonerará a la entidad demandada de su pago, por las mismas razones antes expuestas. Sin costas en esta sede, por conocerse en consulta.

En mérito de lo expuesto, el ***H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral,*** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

***FALLA***

1. **Revocar**parcialmente el ordinal 3º y 4º dela sentencia proferida el 14 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia. En consecuencia: Negar el reconocimiento de la prestación al señor Jhoan Sebastián Ortiz Varón, en lo que tiene que ver con el retroactivo pensional. Respecto de la prestación pensional en favor de la señora Blanca Mary Varón Loaiza, **Disponer** que le sea reconocida a partir de la ejecutoria de esta providencia, en cuantía de $792.741 para el año 2017, y en razón de 13 mesadas anuales.
2. **Revocar** los ordinales 5º y 6º de la sentencia referida, y en su lugar, absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones del pago del retroactivo pensional y de las costas procesales de primera instancia.
3. Confirma todo lo demás.
4. Sin costas en esta instancia.

***NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE.***

La anterior decisión queda notificada en estrados.

**FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES**

Magistrado Ponente

**OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA ANA LUCIA CAICEDO CALDERON**

Magistrada Magistrada

Salva voto

**Alonso Gaviria Ocampo**

Secretario

ANEXO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***BLANCA MARY VARÓN LOAIZA*** | | | | | | | | |
| ***Fecha de nacimiento:*** | | |  |  | ***Fecha reconocimiento pensión:*** | | | *01/11/2017* |
| ***Total semanas cotizadas:*** | | | 514,29 |  | ***Tasa Ley 100/93:*** | **NO** | ***57,00%*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO*** | | | |  | ***Ingreso Base de cotización actualizado*** | ***IPC Dane (serie de empalme)*** | | ***Promedio Salarial (Dias x IBC actualizado/total dias)*** |
| ***Fechas de aporte*** | | ***Número de días*** | ***Ingreso Base de Cotización*** |  | ***IPC Final*** | ***IPC Inicial*** |
| ***Desde*** | ***Hasta*** |  |
| *11-oct-86* | *31-dic-86* | *82* | *30.150,00* |  | ***1.177.311,61*** | ***133,40*** | ***3,42*** | *26.817* |
| *01-ene-87* | *31-jul-87* | *212* | *30.150,00* |  | ***973.414,04*** | ***133,40*** | ***4,13*** | *57.323* |
| *01-ago-87* | *30-sep-87* | *61* | *39.310,00* |  | ***1.269.151,11*** | ***133,40*** | ***4,13*** | *21.505* |
| *01-oct-87* | *31-dic-87* | *92* | *41.040,00* |  | ***1.325.005,38*** | ***133,40*** | ***4,13*** | *33.861* |
| *01-ene-88* | *31-ago-88* | *244* | *41.040,00* |  | ***1.068.366,25*** | ***133,40*** | ***5,12*** | *72.411* |
| *01-sep-88* | *31-dic-88* | *122* | *47.370,00* |  | ***1.233.150,81*** | ***133,40*** | ***5,12*** | *41.790* |
| *01-ene-89* | *03-may-89* | *123* | *47.370,00* |  | ***962.463,60*** | ***133,40*** | ***6,57*** | *32.884* |
| *02-abr-91* | *12-abr-91* | *11* | *54.630,00* |  | ***664.869,03*** | ***133,40*** | ***10,96*** | *2.032* |
| *15-abr-91* | *31-dic-91* | *261* | *54.630,00* |  | ***664.869,03*** | ***133,40*** | ***10,96*** | *48.203* |
| *01-ene-92* | *31-mar-92* | *91* | *99.630,00* |  | ***956.080,34*** | ***133,40*** | ***13,90*** | *24.168* |
| *01-abr-92* | *31-dic-92* | *275* | *136.290,00* |  | ***1.307.881,05*** | ***133,40*** | ***13,90*** | *99.908* |
| *01-ene-93* | *28-feb-93* | *59* | *136.290,00* |  | ***1.045.186,06*** | ***133,40*** | ***17,40*** | *17.129* |
| *01-mar-93* | *30-jun-93* | *122* | *150.270,00* |  | ***1.152.396,42*** | ***133,40*** | ***17,40*** | *39.053* |
| *01-jul-93* | *30-sep-93* | *92* | *165.180,00* |  | ***1.266.738,81*** | ***133,40*** | ***17,40*** | *32.372* |
| *01-oct-93* | *31-oct-94* | *396* | *234.720,00* |  | ***1.800.029,87*** | ***133,40*** | ***17,40*** | *198.003* |
| *01-nov-94* | *31-dic-94* | *61* | *208.781,00* |  | ***1.305.876,15*** | ***133,40*** | ***21,33*** | *22.127* |
| *01-feb-95* | *28-feb-95* | *30* | *319.303,00* |  | ***1.629.064,47*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *13.576* |
| *01-mar-95* | *30-abr-95* | *60* | *236.511,00* |  | ***1.206.664,72*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *20.111* |
| *01-may-95* | *31-may-95* | *30* | *205.052,00* |  | ***1.046.162,82*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *8.718* |
| *01-jun-95* | *30-jun-95* | *30* | *214.113,00* |  | ***1.092.391,49*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *9.103* |
| *01-jul-95* | *31-jul-95* | *30* | *245.008,00* |  | ***1.250.015,90*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *10.417* |
| *01-ago-95* | *31-ago-95* | *30* | *214.965,00* |  | ***1.096.738,34*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *9.139* |
| *01-sep-95* | *30-sep-95* | *30* | *304.863,00* |  | ***1.555.392,46*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *12.962* |
| *01-oct-95* | *31-oct-95* | *30* | *344.102,00* |  | ***1.755.587,45*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *14.630* |
| *01-nov-95* | *30-nov-95* | *30* | *356.487,00* |  | ***1.818.774,97*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *15.156* |
| *01-dic-95* | *31-dic-95* | *30* | *384.846,00* |  | ***1.963.460,86*** | ***133,40*** | ***26,15*** | *16.362* |
| *01-ene-96* | *31-ene-96* | *30* | *440.569,00* |  | ***1.881.478,10*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *15.679* |
| *01-feb-96* | *29-feb-96* | *30* | *304.015,00* |  | ***1.298.315,50*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *10.819* |
| *01-mar-96* | *31-mar-96* | *30* | *440.194,00* |  | ***1.879.876,63*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *15.666* |
| *01-abr-96* | *30-abr-96* | *30* | *361.232,00* |  | ***1.542.664,36*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *12.856* |
| *01-may-96* | *31-may-96* | *30* | *358.923,00* |  | ***1.532.803,63*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *12.773* |
| *01-jun-96* | *30-jun-96* | *30* | *283.739,00* |  | ***1.211.725,55*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *10.098* |
| *01-jul-96* | *31-jul-96* | *30* | *345.406,00* |  | ***1.475.078,42*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *12.292* |
| *01-ago-96* | *31-ago-96* | *30* | *342.040,00* |  | ***1.460.703,70*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *12.173* |
| *01-sep-96* | *30-sep-96* | *30* | *310.853,00* |  | ***1.327.517,62*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *11.063* |
| *01-oct-96* | *31-oct-96* | *30* | *354.867,00* |  | ***1.515.482,22*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *12.629* |
| *01-nov-96* | *30-nov-96* | *30* | *326.252,00* |  | ***1.393.280,04*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *11.611* |
| *01-dic-96* | *31-dic-96* | *30* | *465.581,00* |  | ***1.988.293,44*** | ***133,40*** | ***31,24*** | *16.569* |
| *01-ene-97* | *31-ene-97* | *30* | *372.657,00* |  | ***1.308.342,38*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *10.903* |
| *01-feb-97* | *28-feb-97* | *30* | *344.447,00* |  | ***1.209.301,33*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *10.078* |
| *01-mar-97* | *31-mar-97* | *30* | *530.275,00* |  | ***1.861.715,34*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *15.514* |
| *01-abr-97* | *30-abr-97* | *30* | *557.105,00* |  | ***1.955.911,42*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *16.299* |
| *01-may-97* | *31-may-97* | *30* | *3.480.033,00* |  | ***12.217.869,66*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *101.816* |
| *01-jun-97* | *30-jun-97* | *30* | *364.438,00* |  | ***1.279.486,71*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *10.662* |
| *01-jul-97* | *31-jul-97* | *30* | *336.903,00* |  | ***1.182.815,49*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *9.857* |
| *01-ago-97* | *31-ago-97* | *30* | *451.716,00* |  | ***1.585.906,57*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *13.216* |
| *01-sep-97* | *30-sep-97* | *30* | *359.257,00* |  | ***1.261.297,01*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *10.511* |
| *01-oct-97* | *31-oct-97* | *30* | *394.994,00* |  | ***1.386.764,21*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *11.556* |
| *01-nov-97* | *30-nov-97* | *30* | *354.745,00* |  | ***1.245.456,06*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *10.379* |
| *01-dic-97* | *31-dic-97* | *30* | *923.088,00* |  | ***3.240.822,39*** | ***133,40*** | ***38,00*** | *27.007* |
| *01-ene-98* | *31-ene-98* | *30* | *386.040,00* |  | ***1.151.665,22*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *9.597* |
| *01-feb-98* | *28-feb-98* | *30* | *329.070,00* |  | ***981.707,79*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *8.181* |
| *01-mar-98* | *31-mar-98* | *30* | *315.816,00* |  | ***942.167,40*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *7.851* |
| *01-abr-98* | *30-abr-98* | *30* | *327.259,00* |  | ***976.305,07*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *8.136* |
| *01-may-98* | *31-may-98* | *30* | *724.989,00* |  | ***2.162.844,83*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *18.024* |
| *01-jun-98* | *30-jun-98* | *30* | *477.628,00* |  | ***1.424.897,83*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *11.874* |
| *01-jul-98* | *31-jul-98* | *30* | *478.921,00* |  | ***1.428.755,21*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *11.906* |
| *01-ago-98* | *31-ago-98* | *30* | *492.185,00* |  | ***1.468.325,43*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *12.236* |
| *01-sep-98* | *07-sep-98* | *6* | *237.902,00* |  | ***709.728,16*** | ***133,40*** | ***44,72*** | *1.183* |
| ***TOTAL DIAS*** | | 3.600 |  |  |  | ***IBL*** | | 1.390.774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Mesada*** | | ***792.741*** |